

PROGRAMA DE REACTIVACION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA

(NI-0014)

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO Y GARANTE: República de Nicaragua

ORGANISMOS EJECUTORES: Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

MONTO Y FUENTE:

| | |
|---------------|---------------------------|
| BID: | US\$40,00 millones (FOE) |
| Aporte local: | <u>US\$ 4,63 millones</u> |
| Total: | US\$44,63 millones |

PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:

| | |
|--------------------------|--|
| Plazo de amortización: | 40 años |
| Período de desembolso: | 4 años |
| Período de gracia: | 10 años |
| Tipo de interés: | 1% durante el período de gracia 2% los restantes años |
| Inspección y vigilancia: | 1% |
| Comisión de crédito: | 0,5% |

OBJETIVOS: Contribuir al aumento sostenible de la competitividad sectorial agroalimentaria, a fin de maximizar la contribución del sector al crecimiento económico, condición necesaria para reducir los problemas de pobreza. El objetivo específico es el incremento del ingreso y el empleo rural, para lo cual crea estímulos para el incremento de la productividad de la familia campesina nicaragüense. Contribuye a superar limitaciones de los pequeños y medianos productores en su dotación de recursos productivos para sostener el crecimiento.

DESCRIPCION: El programa se integra con dos componentes:

1. **Apoyo al Desarrollo Rural.** (US\$34,64 millones)
Será ejecutado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR). En el contexto de política económica, implica una transferencia de recursos no reembolsables a las comunidades rurales de bajos ingresos para financiar inversiones productivas en actividades identificadas como esenciales en la estrategia de reactivación: (a) el mejoramiento del capital humano, mediante proyectos de capacitación, organización y de transferencia de tecnología; (b) el mejoramiento de la utilización de los recursos naturales renovables; (c) la rehabilitación y el

mejoramiento de infraestructura productiva; (d) el mejoramiento del acceso de los pequeños productores a los mercados de productos e insumos.

Promueve la participación de las comunidades rurales beneficiarias en la identificación, jerarquización, preparación, ejecución de proyectos productivos y su contribución al financiamiento. El organismo ejecutor se apoya para la preparación y ejecución de los proyectos, en la participación de entidades promotoras y administradoras, que pueden ser entidades privadas o públicas especializadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gremiales y gobiernos locales.

Son elegibles de financiamiento, proyectos que hayan sido preparados y analizados conforme a metodologías previamente definidas, que incluyen determinación de la tasa interna económica de retorno y análisis de costo-efectividad, dependiendo del monto de las inversiones. La tipología de proyectos elegibles se divide en las siguientes categorías: (a) proyectos que mejoren los incentivos a la producción y el acceso a los mercados, como la rehabilitación de caminos rurales y la construcción de centros de acopio; (b) proyectos que mejoren dicho acceso mediante el suministro de servicios de comercialización, que incluye servicios de asistencia técnica para la constitución y administración de cooperativas de mercadeo y para el manejo pos-cosecha; (c) proyectos que mejoren la base de recursos productivos, a través de aumentos en la dotación de capital físico, como pequeños sistemas de riego, obras y prácticas de conservación de suelos, viveros comunales; y (d) proyectos que mejoran la base de los recursos productivos por medio de aumentos en el capital humano, incluyendo la transferencia de tecnología y asistencia técnica en la administración de fincas y empresas.

2. Fortalecimiento Institucional. (US\$2,22 millones)
Subcomponente 2.A Fortalecimiento Institucional del MAG. Tiene por propósito apoyar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en sus esfuerzos por: (a) establecer una nueva institucionalidad para el sector agropecuario, mediante el desarrollo de su nueva estructura orgánica y su nueva relación con las entidades del sector; (b) contribuir a la construcción de capacidades analíticas para la formulación de políticas y dar seguimiento al comportamiento del sector; (c) contribuir al desarrollo de capacidades para el mejoramiento de la gestión institucional.
Subcomponente 2.B Fortalecimiento Institucional del

PNDR. Tiene por propósito mejorar su gerenciamiento y control interno y su capacidad para el seguimiento y evaluación de resultados de los proyectos que financia.

**PROCEDIMIENTOS
AMBIENTALES:**

El Comité de Impactos Sociales y Ambientales (CESI) revisó la ficha de impactos sociales y ambientales del programa el 8 de agosto de 1997. Sus recomendaciones se han tenido en cuenta en la conceptualización del programa, en el desarrollo de los criterios de evaluación de los proyectos y de los procedimientos ambientales correspondientes (pár. 5.6). El informe resumen de impacto social y ambiental fue aprobado por el CESI en su sesión del 3 de noviembre de 1997.

**ALIVIO A
LA POBREZA:**

El programa tiene como objetivo promover crecimiento económico y la generación de empleo en el sector rural, como estrategia de combate de la pobreza. El programa califica como inversión focalizada a la reducción de la pobreza conforme al criterio establecido en el Acuerdo de la Octava Reposición de Recursos, Documento AB1704, modificado por el documento GN-1964-3 de junio 3, 1997, ya que más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. El componente de desarrollo rural del programa atenderá a 91 municipios principalmente de las regiones Central y Pacífico, que comprenden 11 departamentos. En esta zona habitan 1,32 millones de personas, el 73% de la población rural del país. El 75% de los habitantes rurales de esta región, esto es, alrededor de 985.000 personas, son pobres. El programa apoya proyectos que tengan por objetivo promover el desarrollo individual de la mujer campesina y su capacidad para contribuir al mejoramiento de la productividad de la unidad familiar.

BENEFICIOS:

El programa propuesto contribuirá a la reactivación productiva agroalimentaria de Nicaragua por medio de su aporte a la reducción de las limitaciones que confrontan los pequeños y medianos productores en su débil dotación de recursos propios, tanto de índole de capital humano, como de capital fijo. El programa atiende a la solución de limitaciones como falta de conocimientos técnicos y de gestión empresarial, falta de protección de recursos en proceso de degradación, poco acceso al riego, limitados recursos comunes, como el acceso vial y a los centros de comercialización. Como resultado de las acciones y proyectos que serán promovidos por el programa, se obtendrán beneficios en el mejoramiento de la producción y calidad de los productos; la diversificación de las actividades de producción y transformación; el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los

productores para interactuar con otros actores de la cadena agroalimentaria; el mejoramiento de su acceso a los mercados y el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión del desarrollo rural.

RIESGOS:

Nicaragua ha realizado importantes avances en el proceso de reconciliación nacional. Quedan sin embargo, importantes diferencias que deben ser resueltas para que el país se encauce definitivamente por la senda de la reconstrucción nacional y de su inserción plena en la economía de mercado. Una de las más importantes es la concerniente a los conflictos sobre la propiedad. A fin de proporcionar seguridad al agro, debe acelerarse el proceso de titulación definitiva de los beneficiarios de las reformas sociales y resolver los reclamos de los dueños anteriores, con indemnizaciones adecuadas. El gobierno y los partidos políticos han indicado su intención de resolver el problema de la propiedad en forma satisfactoria. El no lograrlo constituiría un obstáculo importante en el proceso de reactivación.

El fortalecimiento del proceso de descentralización, trasladando competencias a los niveles locales, es un aspecto crítico, junto con el de privatización, para mejorar la calidad de la prestación de los servicios básicos. En tal sentido, las limitaciones en las finanzas públicas municipales y su baja capacidad gerencial, constituyen debilidades de los gobiernos locales, especialmente para el mantenimiento de servicios e infraestructura. Las acciones del programa contribuirán al mejoramiento de la capacidad de gestión local.

**CONTRATACIONES
Y ADQUISICIONES:**

El valor máximo de cada proyecto no excederá de US\$650.000 y la adquisición de bienes requeridos por el programa no excederá de US\$200.000, por ende no se anticipa que habrán licitaciones públicas internacionales.

**EXCEPCIONES A
POLITICAS DEL
BANCO:**

Con recursos del eventual préstamo se propone el financiamiento del 26% de los costos recurrentes por personal profesional y técnico a ser contratado durante los cuatro años previstos para la ejecución del programa. Este costo es incremental y el personal involucrado estará dedicado exclusivamente a las actividades de ejecución del programa. Se utilizarían US\$1,51 millones para este propósito. El adelanto de recursos del programa podrá ser de hasta 10% del monto del financiamiento (par. 2.28).

ESTRATEGIA DEL

La estrategia del Banco en Nicaragua ha sido desarro-

**BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

llada en el Documento de País, de octubre 1996 y confirmada durante la misión de programación de mayo 5-7 de 1997. El objetivo de la estrategia es lograr el crecimiento sostenido con equidad. Un requisito imprescindible para ello es mantener la estabilidad económica. La estrategia se basa en cuatro instrumentos: (a) promover el desarrollo del empresario privado, especialmente en el sector motor de la economía nicaragüense, que es la agricultura; (b) eliminar las limitaciones financieras a través de la reducción de la deuda externa; (c) mejorar el capital humano y reducir la pobreza; y (d) optimizar la utilización y la conservación de los recursos naturales. La estrategia se instrumentará mediante el programa de préstamos, estudios, proyectos en ejecución y un activo diálogo de práctica económica y social. El programa conceptualizado se enmarca dentro de esta estrategia.

A partir de 1990 el Banco ha apoyado al país en sus esfuerzos por lograr el reajuste y la reactivación de la agricultura mediante varias operaciones de préstamo y de cooperación técnica, como el programa de reajuste estructural agrícola, un programa de modernización de servicios agropecuarios, un programa de desarrollo agroforestal, un programa de apoyo a la microempresa, de reforma del sistema financiero y la primera fase de un programa de desarrollo rural, del cual el presente programa constituye un seguimiento y profundización.

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

1. Condiciones previas al primer desembolso

Antes del primer desembolso, el prestatario deberá: (a) presentar a satisfacción del Banco evidencia de que ha puesto en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, incluyendo el modelo de contrato que utilizará para la ejecución de proyectos con las Entidades Promotoras (EP) y Entidades Administradoras (EA) (pár. 3.7); y (b) está operando una nueva agencia departamental para atender los departamentos de Madriz, Estelí y Nueva Segovia (pár. 4.12).

2. Otras condiciones

Dentro de un año a partir de la fecha del contrato de préstamo, el prestatario presentará al Banco evidencia de que: (a) el PNDR ha contratado y ejecutado los estudios para el mejoramiento del Sistema de Información Gerencial y operación de la Unidad de Auditoría Interna y de que los nuevos procedimientos se encuentran en operación; (b) el PNDR ha contratado y se encuentran en ejecución los estudios de las encuestas especiales en comunidades seleccionadas

para el establecimiento de la base de información para la evaluación ex post del programa; (c) antes del 31 de octubre de cada año, durante el período de ejecución del programa, el prestatario someterá al Banco el Plan Operativo Anual para el siguiente año, que incluirá la información que se detalla en el Capítulo III de este documento; (d) el Banco podrá revisar los documentos de respaldo para los desembolsos, por muestreo (pár. 3.4). Otras condiciones se detallan en los siguientes párrafos: 2.26 financiamiento de intereses; 2.27 reconocimiento de gastos; 3.11, 3.15, 3.18 y 3.19 informes; 3.13 mantenimiento; y 4.14 auditoría.

I. MARCO DE REFERENCIA

A. Contexto económico

- 1.1 Nicaragua es uno de los países de América Latina de más bajo nivel de desarrollo, de más alto índice de pobreza y desigual distribución del ingreso. Durante la década de los años 1980, la economía del país se deterioró a consecuencia de la guerra civil, el manejo económico centralizado y los disturbios político-sociales. A principios de 1990, el PIB y las exportaciones habían declinado a niveles del 40% de los logrados a fines de los 70s. A partir de 1990, Nicaragua comenzó con el apoyo de la comunidad internacional, a reorientar su economía hacia el mercado y a incrementar la inversión pública en servicios básicos e infraestructura, para atender las necesidades de reconstrucción, que son sustanciales. A fin de satisfacer las necesidades de inversión, el país debe aún incrementar en forma sustancial el ahorro, mejorar la eficiencia de las inversiones del sector público y reactivar la inversión del sector privado.
- 1.2 A mediados de 1994, el gobierno acordó un Programa Reforzado de Ajuste Estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de tres años de duración, para continuar las reformas iniciadas: privatización de empresas públicas, reducción de la banca estatal, solución de los problemas sobre derechos de propiedad y reducción del gasto público. La administración que se inició en Enero de 1997, ha continuado la instrumentación de medidas necesarias para apoyar la reactivación. En junio de 1997 fue emitida una nueva ley tributaria, cuyo propósito es mejorar la recaudación fiscal y fomentar la inversión y las exportaciones, especialmente en el sector agroalimentario. Se prepara además una ley de reforma del sector público, un plan para reducir el déficit del gobierno central y limitar las pérdidas originadas en la operación de la banca estatal; en forma complementaria, se ejecuta un programa de modernización y privatización de empresas públicas. Ambas operaciones son apoyadas por el Banco.
- 1.3 La economía ha respondido favorablemente a las reformas estructurales iniciadas en 1990. El crecimiento real del PIB ha superado el 4% anual durante los últimos tres años y se espera que para 1997 sea por lo menos igual al 5,5% experimentado el año anterior. La tasa de desempleo se redujo del 22% en 1993 al 16% en 1996, al tiempo que la tasa anual de inflación pasó del 20% en 1993 al 11% en agosto de 1997. El servicio de la deuda externa, sin embargo, no obstante la sustancial reducción lograda, continúa representando una carga fiscal considerable. El gobierno confía en llegar a un acuerdo con el FMI, hacia fines de 1997, para la firma de un segundo Programa Reforzado de Ajuste Estructural (ESAF II), de dos años de duración y obtener alivio de la deuda a través de la Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados. El país puede lograr las tasas anuales de crecimiento del 6% que necesita para reactivar su economía, si se profundiza el proceso de reforma

estructural, de disciplina fiscal y de mayor inversión del sector privado.

B. La agricultura y las políticas sectoriales

- 1.4 El papel protagónico que la reactivación del sector agroalimentario tiene en la recuperación económica de Nicaragua y en el alivio de la pobreza, resulta evidente de la revisión de las cifras del sector primario agrícola, que produce alrededor del 65% de las exportaciones totales, genera el 45% del empleo y contribuye con el 30% del PIB. El crecimiento logrado en los últimos tres años ha sido liderado por el dinamismo de la agricultura, que aumentó en un 15% en 1996. Por otra parte, la pobreza se concentra en el sector rural. Mientras el 41% de la población total es considerada como rural, el 63% de los pobres y el 78% de los extremadamente pobres, viven en el área rural.
- 1.5 Política comercial y de precios. Las políticas sectoriales recientemente implementadas favorecen la posición competitiva del sector, especialmente en materia de política comercial y precios. Los incentivos que influyen la asignación de recursos entre actividades productivas han sido provistos, hasta muy recientemente, a través de instrumentos de protección relacionados con la política comercial. La protección a las importaciones se ha realizado por medio de aranceles, banda de precios para granos básicos, prohibiciones y autorizaciones previas y exoneraciones arancelarias. Estimaciones de protección efectiva realizadas en 1996, indican que el sistema de incentivos históricamente ha favorecido en términos relativos a la industria manufacturera, cuya tasa de protección efectiva fue calculada en 38%, en comparación a la agricultura, cuya tasa de protección efectiva se estimó en el 24%.
- 1.6 Las medidas incorporadas en la nueva ley tributaria aprobada en Junio de 1997 modifican la política comercial y de precios y crean nuevos incentivos a la reactivación productiva agrícola, especialmente a la agroexportación. En materia comercial, se ha eliminado el impuesto a las exportaciones; los exportadores podrán reclamar crédito fiscal por impuestos pagados por bienes importados para el proceso productivo. Se han eliminado las licencias de importación y las barreras no arancelarias al comercio exterior, excepto por razones fitosanitarias y las medidas de salvaguarda contempladas en el régimen aduanero y arancelario centroamericano. Se han simplificado los trámites de importación y exportación, mediante la modernización del sistema aduanero, operación apoyada por el Banco. Las modificaciones introducidas en la ley sobre representatividad exclusiva, tendrán como resultado la reducción de los precios de los insumos para la producción agrícola, al restablecer condiciones de libre competencia para la importación de agroquímicos y maquinaria.
- 1.7 El sector agropecuario ha sido exonerado, por un período de dos años, del pago de los impuestos de importación de materias primas, de bienes de capital y repuestos, con lo que el sector estará

tributando únicamente durante los próximos dos años, el impuesto a la tierra, creado por la misma ley. La reforma tributaria aprobada ha reducido la dispersión arancelaria. El máximo arancel vigente es de 35% y los derechos arancelarios de importación serán del 10% en el año 2000 para bienes de consumo final, del 5% para materias primas y del 5 al 10% para bienes de capital. Sin embargo, en los últimos meses Nicaragua ha tomado la iniciativa en promover un nuevo consenso centroamericano sobre aranceles agropecuarios y los ha aumentado con respecto al nivel previo, bajo los acuerdos regionales. Nicaragua ingresó, en Septiembre de 1995, a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

- 1.8 Los impuestos internos a la agricultura han sido reducidos. Se ha exonerado del impuesto general de ventas (IGV) a los bienes agropecuarios no transformados y a los de primera transformación, como trillados y beneficiados, al alquiler de maquinaria agrícola y las transacciones de tierra, tanto en alquiler como enajenación. El impuesto municipal sobre ingresos disminuirá del 2% al 1,5% a partir de 1998 y al 1% en el año 2000. La nueva ley tributaria también exonera del pago del impuesto municipal sobre ingresos, a las ventas de ganado, huevos, leche, queso y carnes. A partir del 1o de Enero de 1998, se exoneran de todo tipo de impuestos las transacciones bursátiles a través de bolsas agropecuarias y de valores. En resumen, el balance de políticas comerciales es favorable a la reactivación productiva agroalimentaria .
- 1.9 La reforma tributaria ha simplificado la estructura impositiva; se han reducido significativamente las facultades discrecionales de los funcionarios para conceder exenciones fiscales y se han decretado sanciones a la evasión tributaria. Se ha establecido un control fiscal de las tasas cero, mediante el cual se reintegra al contribuyente los impuestos pagados, con posterioridad a la operación, cuando el bien transado pasa a ser parte de un producto terminado exento del pago de impuestos. La base de tributación se ha ampliado; el ingreso anual mínimo tributable es de 50.000 córdobas, por lo que se anticipa, no obstante los incentivos otorgados, que la recaudación se incremente en alrededor del 30% .
- 1.10 Los conflictos sobre la propiedad. La falta de seguridad en la tenencia de la tierra constituye un factor limitante de la reactivación productiva agroalimentaria. La situación de inseguridad es el resultado de situaciones conflictivas que se crean cuando beneficiarios de las reformas sociales ocupan las tierras que legalmente les fueron adjudicadas, sin que el Estado haya indemnizado aún al dueño anterior. En esta situación, los ocupantes no tienen seguridad absoluta de ser dueños de su propiedad; los títulos extendidos por el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria no son títulos en dominio pleno, por lo tanto, son a menudo cuestionados por las instituciones privadas de crédito y rechazados como garantías. Los procesos de legalización y titulación apoyados por el Banco en el área urbana y el Banco Mundial en la rural, han contribuido a reducir la dimensión del problema. Sin embargo, se ha calculado que solamente un 25% de la

tierra agrícola posee títulos en dominio pleno, por ende, el reto que queda por delante con respecto a la titulación es aún importante.

- 1.11 A fin de garantizar los derechos de los beneficiarios del proceso de reforma agraria y de otras adjudicaciones (desmovilizados del ejército y de la ex-resistencia nicaragüense), el Poder Ejecutivo ha elaborado un nuevo proyecto de ley de estabilidad para beneficiarios de la reforma agraria y urbana, que enviará próximamente al poder legislativo, con el propósito de regular la tenencia, ejercicio, cargas y extinción de derechos adquiridos sobre bienes pertenecientes al Estado o sus instituciones, bajo las leyes 85 y 86 de marzo, 1990; ley 88 de Abril de 1990; ley 209, de estabilidad de la propiedad de noviembre de 1995 y la ley de reforma agraria y sus reformas. La nueva ley consolidaría la validez legal de los títulos de reforma agraria y constancias de asignación, en el primer caso, como documentos públicos, que acreditan la legitimidad de la adquisición de la propiedad y en el segundo, como documentos auténticos, que servirán de título provisional mientras se otorga el título de reforma agraria. Se comenta que el proyecto de ley refleja los acuerdos de un pacto político entre la presente administración y los partidos políticos de oposición, para resolver el problema de la propiedad.
- 1.12 Conforme a información del Ministerio de Finanzas, alrededor de 1.609 casos de propiedades en el sector rural han sido resueltos. La superficie involucrada representa 456.780 ha., alrededor del 10% de la superficie agrícola y ganadera del país. Existe un remanente de 7.115 propiedades rurales en reclamo y un total de 5.764 reclamantes de bienes rústicos y urbanos. En alrededor del 50% de los casos revisados, el gobierno ha hecho ofertas de compensación a los antiguos propietarios. Solamente el 28% de los casos de reclamos han sido resueltos. Los ex-dueños de propiedades confiscadas han sido compensados con bonos denominados en córdobas e indexados al dólar de los Estados Unidos. Tienen un período de madurez de 15 años y una tasa de interés del 3% al 5%. Desde 1993, se ha emitido bonos por US\$580 millones. Existe un activo mercado de estos bonos, los que son servidos regularmente. Alrededor de US\$134,1 millones en bonos han sido redimidos.
- 1.13 Los problemas de la propiedad rural, conjuntamente con situaciones de inseguridad personal, ciertamente inciden en forma negativa en el desarrollo de los mercados de tierras. A pesar del problema general de falta de seguridad en la tenencia de la tierra, existen algunas regiones geográficas en las cuales los mercados de tierras funcionan relativamente bien. Sin embargo, a fin de resolver los problemas remanentes y comunicar al agro un mensaje de seguridad, debe acelerarse en proceso de titulación definitiva de los beneficiarios de las reformas sociales y resolver los reclamos de los dueños anteriores, mediante indemnizaciones adecuadas. El gobierno ha indicado que esta es precisamente la estrategia que se propone seguir.

- 1.14 Los servicios financieros rurales. La falta, real o percibida, de garantías reales, por conflictos o falta de claridad sobre la propiedad, afecta los riesgos crediticios y la cobertura y calidad de los servicios financieros. Estas mismas limitaciones han promovido la búsqueda de soluciones innovadoras para proveer crédito, principalmente mediante mecanismos de grupos solidarios y de garantía de la cosecha misma. Con apoyo de distintos programas bilaterales de asistencia se han desarrollado bancos locales, que son básicamente instituciones financieras no reguladas, de carácter asociativo, impulsadas por organizaciones no gubernamentales, cooperativas de ahorro y crédito y fundaciones. El capital semilla es provisto por el organismo donante o promotor y en algunos casos, complementado por limitados aportes de capital de los socios, en los casos de los bancos comunales. La oferta financiera es limitada por las disponibilidades de capital para atender la demanda y por las restricciones legales para movilizar el ahorro local.
- 1.15 A pesar de los esfuerzos por reestructurar la banca estatal, iniciados a principios de la década, la situación financiera, especialmente del Banco Nacional de Desarrollo (BANADES) ha continuado deteriorándose. El gobierno emitió recientemente un decreto colocando al BANADES bajo un régimen de excepcionalidad, supervisado por la Superintendencia de Bancos, que concluye en mayo de 1998, bajo el supuesto de que si al final de dicho período, no está en cumplimiento de las normas prudenciales vigentes, se procedería a cerrar el BANADES. El Banco está evaluando el Programa de Reforma de la Administración Pública (RAP), que incluye la banca estatal, y condicionará el desembolso al grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas en el régimen especial.
- 1.16 El Banco apoya el desarrollo alternativo de servicios financieros para el sector rural mediante el desarrollo de bancos regionales, a partir de intermediarios financieros especializados, vía el establecimiento del marco legal regulatorio dentro de la Ley de Bancos y el fortalecimiento de estas instituciones por medio del Programa de Apoyo a la Microempresa (PAMIC). Un programa piloto del Banco Mundial, iniciado en 1995, incentiva a los bancos privados a establecer sucursales en comunidades rurales que carecen de servicios financieros, mediante subsidios y asistencia técnica para financiar los costos fijos de establecimiento. Tres bancos privados han acordado establecer un total de 10 sucursales bajo dicho programa. La suma de estos esfuerzos, ha comenzado a producir resultados: en relación al primer semestre de 1996, en el primer semestre de este año, el sistema financiero formal ha incrementado los desembolsos de crédito al sector agropecuario, pasando de US\$322 millones a US\$597, esto es, un incremento del 85%.

C. Experiencia del Banco y Otros Donantes

- 1.17 A fines de 1992 fue aprobada una operación de ajuste sectorial, cuyo propósito principal fue establecer un marco sectorial e

institucional apropiado al reestablecimiento de la economía de mercado, después de once años de régimen de planificación central. En 1994 fue aprobado un préstamo para financiar un programa de modernización de los servicios, que con carácter de bien público debe prestar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en materia de sanidad agropecuaria, certificación de semillas, estadísticas agropecuarias e información de precios y mercados. Tiene una orientación hacia el cliente y fomenta la participación del sector privado en la provisión de servicios. En 1995 fue aprobado un programa de conservación y manejo agroforestal, orientado a mejorar el manejo sustentable de áreas protegidas y la productividad de pequeños productores, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, manejo de bosques naturales y de usos múltiples.

- 1.18 En 1994 fue aprobado también el préstamo para el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), (927/SF-NI), con el cual se han financiado inversiones productivas para beneficio mayoritario de los pequeños productores rurales. Con recursos de este programa, se ha rehabilitado infraestructura pública de caminos rurales, financiado proyectos de capacitación y transferencia de tecnología, obras comunales de comercialización e inversiones en aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
- 1.19 El programa que se propone representa la continuación y profundización de dicho programa. Hasta julio de 1997 se habían desembolsado el 49% de los recursos del programa en ejecución y se tienen recursos comprometidos por proyectos en ejecución por un 25% adicional. El 37% de los proyectos aprobados y el 57,2% de las inversiones corresponden a rehabilitación de caminos rurales (524km); el 27% y el 15% respectivamente, a transferencia de tecnología y capacitación; el 14% y 10% a conservación de recursos naturales; el 17,4% y 15,2%, a fortalecimiento institucional de entidades participantes.
- 1.20 Las lecciones aprendidas como resultado de la evaluación de la fase de desarrollo rural vigente, se han incorporado en la nueva operación por medio de varias acciones de mejoramiento que se describen en diversas secciones de este documento: (i) focalización de la demanda, equidad distributiva, participación comunitaria, pár. 2.10, 2.14, 3.8, 4.16, 5.17; (ii) criterios de evaluación, tipología de proyectos, capacitación, pár.2.16, 2.17, 3.16; (iii) sostenibilidad institucional, pár.3.2; (iv) gestión gerencial, pár.3.3, 4.9, 4.13; (v) mecanismos de ejecución y captación de demanda, pár. 3.7; (vi) operación y mantenimiento, pár. 3.13; (vii) seguimiento y evaluación, pár. 3.16, 4.10.
- 1.21 El Banco Mundial financia desde 1993, un programa con un componente de generación y transferencia de tecnología y uno de titulación de tierras y catastro rural. En 1996 aprobó, además, un proyecto de fortalecimiento de municipalidades rurales en los departamentos de León y Chinandega, que será ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM). Diversos donantes, principalmente bilaterales apoyan al sector rural por medio de 19 programas,

dirigidos a beneficiar a grupos de pequeños productores en distintas regiones del país, con inversiones en desarrollo ganadero, forestal, agrícola, de protección de bosques y manglares. Diez de estos proyectos tienen componentes de crédito agrícola canalizados por intermediarios financieros no convencionales.

- 1.22 La existencia de varios programas bajo distintos convenios, mecanismos de ejecución y objetivos, ha debilitado la capacidad del sector para enmarcar los programas bajo una política coherente en cuanto a la sostenibilidad de los intermediarios financieros no convencionales en las áreas rurales. Durante la etapa de preparación de la operación que más adelante se describe, se apoyó al MAG y al PNDR en preparar las bases de un reglamento unificado que conduzca a una mayor coherencia y eficiencia en la coordinación de los programas mencionados. Este asunto está aún bajo estudio y discusión por el MAG y no se han tomado decisiones al respecto.

D. Estrategia del Banco

- 1.23 La estrategia del Banco en Nicaragua ha sido desarrollada en el Documento de País de octubre de 1996 y confirmada durante la misión de programación de mayo 5-7 de 1997. El objetivo de la estrategia es lograr el crecimiento sostenido con equidad. El Banco considera la reactivación del sector agroalimentario como el eje de la reactivación económica del país. La estrategia tiene como condición imprescindible, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Se basa en cuatro instrumentos: (a) la promoción del desarrollo empresarial privado; (b) la reducción de la deuda externa; (c) el mejoramiento del capital humano, mediante programas de capacitación y reducción de la pobreza; y (d) el manejo de los recursos naturales renovables con criterio de sostenibilidad. El programa conceptualizado se enmarca dentro de esta estrategia.

E. Conceptualización del Programa

- 1.24 El gobierno de Nicaragua ha declarado que la disminución de la pobreza tiene alta prioridad en su programa de gobierno. Un propósito de su estrategia de desarrollo rural es el diseño y ejecución de planes, acciones y mecanismos para reducir la pobreza rural. El crecimiento económico constituye la manera más efectiva de combatir los problemas de pobreza sobre una base sostenible. Se postula que para lograr este objetivo, el apoyo a la reactivación productiva del sector agroalimentario representa la mejor opción, ya que genera la mayor parte del valor por las exportaciones, representa una proporción significativa de la economía, proporciona una respuesta en el corto plazo a los estímulos a la inversión, sus actividades son intensivas en mano de obra y genera la mayor proporción del empleo total.
- 1.25 El logro de los objetivos de reactivación puede lograrse por medio de tres líneas principales de acción:

- a. Mejoramiento del uso de los factores de la producción a través del mercado. Un importante estímulo al crecimiento en el corto plazo, proviene del mejor uso de los recursos. Los ajustes estructurales y las reformas sectoriales en proceso, están proporcionando dicho estímulo. Sin embargo, es necesario, como se desprende de la situación sectorial brevemente descrita, crear condiciones para un mejor funcionamiento de los mercados de tierras, de los servicios financieros rurales, de comercialización y de generación y transferencia de tecnología.
 - b. Mejorar la dotación de recursos productivos para sostener el crecimiento. El país debe invertir en el mejoramiento del capital humano y en tecnología e infraestructura física para ampliar la base del crecimiento. Para ello se deben instrumentar acciones que contribuyan a un proceso más dinámico de inversión, tanto pública como privada.
 - c. Mejoramiento de la gestión pública agropecuaria. Es necesario ajustar las funciones de las instituciones del sector público agropecuario y su dimensión y capacidad para responder adecuadamente a las necesidades de regulación, prestación de servicios y de desarrollo de capacidad de diálogo con el sector privado, la sociedad civil y las demás instituciones de gobierno, para proponer e instrumentar estrategias de apoyo a la reactivación productiva del sector. Esta actividad incluye como elementos importantes, la descentralización de los servicios y la coordinación interinstitucional.
- 1.26 El nuevo programa conceptualizado responde más adecuadamente a tres elementos esenciales de la estrategia de combate a la pobreza mediante la promoción del crecimiento económico: (a) mejoramiento del capital humano e institucional y de la utilización de tecnología productiva agroalimentaria; (b) rehabilitación y mejoramiento del capital físico productivo; (c) mejoramiento del acceso de los pequeños productores a los mercados de productos e insumos. La premisa fundamental del programa es apoyar a los pequeños y medianos productores, que constituyen la mayoría de los productores agropecuarios nicaragüenses, a confrontar exitosamente los retos y oportunidades de la apertura económica y lograr su adaptación a nuevas condiciones de competitividad.
- 1.27 La experiencia con proyectos similares ha demostrado que un programa bien sustentado de transferencias para ejecución de inversiones productivas, dirigidas a atender prioridades identificadas y jerarquizadas por las comunidades rurales beneficiarias, proporciona un impulso dinamizador de la reactivación productiva, que contribuye a la generación de empleo y a la disminución de la pobreza rural, si está soportado por un marco de políticas macroeconómicas y sectoriales bien estructurado y favorable. El programa que en adelante se propone, se inscribe dentro de la estrategia delineada.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivos e impacto esperado del Programa

- 2.1 El objetivo general del programa es el de contribuir al aumento sostenible de la competitividad sectorial agroalimentaria, a fin de maximizar la contribución de este sector al crecimiento económico, condición necesaria para reducir los problemas de pobreza. El objetivo específico es el incremento del ingreso y del empleo rural, para lo cual crea estímulos para el incremento de la productividad de la familia campesina nicaragüense. Contribuye a superar limitaciones de los pequeños y medianos productores en su dotación de recursos productivos para sostener el crecimiento.
- 2.2 Las actividades que apoya el programa tienen por propósito lograr las siguientes metas esenciales de la estrategia de reactivación: (a) el mejoramiento del capital humano, mediante actividades de capacitación, organización y transferencia de tecnología; (b) el mejoramiento de la utilización de los recursos naturales; (c) la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura productiva; y (d) el mejoramiento del acceso de los pequeños productores a los mercados de productos e insumos.
- 2.3 Son acciones instrumentales para el logro de los objetivos: el mejoramiento de la producción y de la calidad de los productos; la diversificación de las actividades de producción y transformación; el fortalecimiento de la capacidad organizacional de los productores para interactuar con otros actores de la cadena agroalimentaria; el facilitamiento del acceso a los mercados; la generación de capacidad para la gestión del desarrollo rural, tanto en el sector público como en el privado y el fomento del desarrollo de servicios privados de asistencia técnica.

B. Descripción

- 2.4 El programa se integra con dos componentes: 1. Apoyo al Desarrollo Rural y 2. Fortalecimiento Institucional.

1. Componente de Apoyo al Desarrollo Rural

- 2.5 El componente de desarrollo rural, que será ejecutado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), promueve la participación de las comunidades rurales beneficiarias, en la identificación, jerarquización, preparación y ejecución de proyectos productivos elegibles y la contribución de las mismas a su financiamiento. El organismo ejecutor realiza la preparación y ejecución de los proyectos, por medio de entidades promotoras (EP) y entidades administradoras (EA), las que pueden ser entidades privadas y públicas especializadas, organizaciones no gubernamentales, gremiales y gobiernos locales.

- 2.6 Población objetivo. Desde el contexto de política económica, el programa significa una transferencia de recursos no reembolsables a las comunidades rurales de bajos ingresos. Consecuentemente, se ha otorgado especial consideración a los criterios de equidad distributiva de los beneficios. La población objetivo de beneficio directo se agrupa en dos estratos: (a) los pequeños productores rurales pobres, que logran ingresos apenas suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y algunos servicios básicos, generan muy poco o ningún excedente, pero tienen posibilidades de generarlos, por tener acceso a la tierra y contar con los elementos mínimos indispensables para la producción; (b) productores medianos, que generan algunos excedentes, pero tienen limitaciones en acceso a los servicios, principalmente de tecnología, organización productiva y comercialización.
- 2.7 La población objetivo de beneficio indirecto son los pobres rurales asalariados, cuyos ingresos a menudo no permiten siquiera satisfacer adecuadamente las necesidades alimentarias del grupo familiar y no tienen acceso a la tierra. Obtendrán beneficios por el empleo generado por los productores y otras oportunidades económicas derivadas de la reactivación productiva.
- 2.8 El componente de desarrollo rural del programa propuesto constituye una continuación y profundización de la etapa actualmente en ejecución, que cubre únicamente cuatro departamentos de la región Central: Boaco, Chontales, Matagalpa y Jinotega. Estas áreas fueron identificadas en su oportunidad por tener la mayor incidencia de pobreza rural y potencial productivo y por complementarse con proyectos apoyados por otros donantes.
- 2.9 Las necesidades de apoyo al desarrollo rural mediante inversiones productivas generadoras de crecimiento y empleo, se presentan en todo el territorio nacional. En vista de las limitaciones de recursos, se consideraron los siguientes criterios de focalización para identificar la población objetivo potencialmente beneficiaria en la nueva etapa del programa: (a) incidencia de población pobre rural a nivel de municipio; (b) el potencial productivo de las diversas zonas geográficas; (c) la existencia de otros programas y proyectos financiados por otros donantes; (d) la capacidad institucional de gerenciamiento. Con base en dichas consideraciones, se ha identificado una población objetivo de 1,32 millones de habitantes rurales, de los cuales alrededor de 985.000, el 75%, son pobres. En términos geográficos, se propone ampliar la cobertura del componente de desarrollo rural del programa a un total de 11 departamentos, que agrupan a 91 municipios, principalmente de las regiones Pacífico y Central, en las que habita el 73% de la de la población rural del país .
- 2.10 Criterios de distribución de los recursos. El procedimiento de aprobación de inversiones ha funcionado hasta ahora sobre una base de primero en el tiempo primero en servicio, para proyectos declarados elegibles, que han satisfecho los criterios exigibles de evaluación. Este mecanismo, que ha funcionado razonablemente bien durante el período inicial de demanda limitada, no es el más

adecuado al expandirse el programa. Por lo tanto, se ha desarrollado un mecanismo de distribución de asignaciones simple, con base en indicadores del nivel de pobreza y de potencial de desarrollo. La unidad de asignación de recursos es el municipio, unidad básica de la división político administrativa del país. Hay actualmente 145 municipios en Nicaragua, distribuidos en diecisiete departamentos, estos últimos son unidades de división territorial, sin funciones administrativas.

- 2.11 Existen pocos datos recopilados a nivel de municipio. Por ejemplo, no se tiene información sobre los niveles de escolaridad por municipio, que sería un indicador del nivel de desarrollo del capital humano. Sin embargo, se cuenta con información sobre número de fincas por municipio y número de pobres rurales, con lo que un indicador de potencial de participación y desarrollo es la razón entre ambos números. En la medida que sea mayor dicha relación, menor sería la concentración de fincas grandes y sería mayor el número de familias con acceso a la tierra, versus el número de asalariados rurales, que tienen menor potencial de desarrollo. En vista de que la medida de potencial de desarrollo es parcial, se le ha asignado una ponderación de 25%, asociada a otra ponderación de 75% al factor de pobreza, representado por el número de pobres rurales en el municipio, relativo a los pobres rurales del departamento.
- 2.12 Se utilizaron las cifras ajustadas por el Fondo Social de Emergencia (FISE), utilizando los datos del censo de población de 1995, al mapa de pobreza municipal de Nicaragua preparado por investigadores del Research Triangle Institute (RTI), de la Universidad de Duke. Dichos estudios tuvieron a su vez como base, la encuesta nacional sobre medición de niveles de vida realizada en 1993, para el estudio de pobreza efectuado por el Banco Mundial. Dado que la encuesta de hogares se actualizará cada tres o cuatro años, los indicadores permitirán detectar los cambios en los niveles de pobreza, generación de empleo formal e informal y migración. Se planea además, efectuar una encuesta especial para establecer las condiciones de base como parte de las actividades del programa.
- 2.13 Se ha efectuado una primera asignación, de carácter indicativo, del 70% de los recursos que estarán disponibles, por municipio, con base en los criterios descritos. En cuanto a la asignación de recursos de inversión en el tiempo, se ha optado por no indicar asignaciones anuales por municipio, porque tal enfoque podría desalentar a los municipios con menor capacidad de organización y preparación de iniciativas de proyectos. El 30% de los recursos se ha dejado sin asignación, para ser asignado después que haya transcurrido el 50% del período de ejecución, entre los municipios que hayan mostrado mayor dinamismo en la identificación, preparación y ejecución de proyectos.
- 2.14 Participación comunitaria. En esta nueva etapa del programa se buscará incrementar el grado de participación de las comunidades en el ciclo de proyectos. Las ideas e iniciativas de proyectos pueden

ser generadas por las comunidades o por los grupos directamente beneficiados o por asociaciones gremiales y cooperativas, pero serán consensuadas y jerarquizadas a nivel local, mediante procedimientos participativos, para lo cual se empleará la instancia del Comité de Desarrollo Municipal. Instituciones públicas y privadas especializadas, como organizaciones no-gubernamentales podrían ayudar a las comunidades en el desarrollo de sus ideas de proyecto.

- 2.15 Elegibilidad de los proyectos. La elegibilidad de los proyectos a ser financiados con recursos del programa depende del cumplimiento de requisitos y criterios técnicos, económicos, de género, ambientales y de participación explícitos en las pautas incluidas en el Reglamento Operativo, para la identificación, preparación, evaluación y ejecución de proyectos. Solamente pueden ser elegibles inversiones productivas que se hayan ajustado a los procedimientos de consulta a nivel comunitario, cuyas fichas de proyecto sean consistentes con las pautas y criterios del programa, hayan satisfecho los requisitos de demostración de viabilidad económica y correspondan a una de las categorías definidas en la tipología de proyectos y demás requisitos descritos en el Reglamento Operativo del Programa.
- 2.16 Evaluación de proyectos. La evaluación de inversiones elegibles se efectuará aplicando dos estándares de evaluación. Si las inversiones son iguales o superan el equivalente de US\$100.000, se deberán realizar estudios de factibilidad, con cálculo del valor presente neto y la tasa interna económica de retorno (TIRE), utilizando el 12% como la tasa de costo de oportunidad del capital. Cuando las inversiones sean menores de US\$100.000, se aplicarán criterios más simples, de análisis de costo-efectividad. La metodologías de evaluación económica y de análisis de costo-efectividad se describen en el Reglamento Operativo del programa.
- 2.17 Tipología de proyectos. Los proyectos elegibles descritos en la tipología de proyectos, corresponden a inversiones que contribuyan a mejorar la dotación de recursos productivos para sostener el crecimiento. Se agrupan en las siguientes categorías: (a) proyectos que mejoren los incentivos a la producción y el acceso a los mercados, a través de obras para la comercialización y la pequeña industria, tales como la rehabilitación de caminos rurales y la construcción de centros de acopio y rastros; (b) proyectos que mejoren dicho acceso mediante el suministro de servicios de comercialización, incluyendo asistencia técnica para la constitución y administración de cooperativas de mercadeo y para el manejo pos-cosecha; (c) proyectos que mejoren la base de recursos productivos, a través de aumentos en la dotación de capital físico, por ejemplo pequeños sistemas de riego, obras y prácticas de conservación de suelos, reforestación, sistemas agroforestales, mejoramiento genético de hatos ganaderos, mediante inseminación artificial, viveros comunales y plántulas de cultivos perennes; (d) proyectos que mejoran la base de los recursos productivos por medio de aumentos en el capital humano, mediante el desarrollo de servicios privados de transferencia de tecnología y asistencia técnica para la

administración de fincas y empresas agroalimentarias, utilizando una metodología que será convenida.

- 2.18 No se ha considerado conveniente efectuar asignaciones de recursos entre categorías de proyectos, a fin de mantener compatibilidad con el criterio de responder a las demandas y prioridades de las comunidades rurales y fomentar su grado de participación, con la excepción de los proyectos de rehabilitación de caminos rurales. A fin de conservar un adecuado balance entre los diversos tipos de proyectos se establece en el Reglamento Operativo, un techo del 50% del monto total de los recursos programados, para inversiones en rehabilitación de caminos rurales, que en la primera etapa han ocupado un porcentaje sustancial (el 58%) de la cartera. Sin embargo, este criterio sería revisado durante la evaluación de medio término y podría ser modificado.

2. Componente de Fortalecimiento Institucional

- 2.19 Las acciones de fortalecimiento institucional del programa se focalizan en dos instituciones: (a) el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), responsable de gestar las políticas y estrategias de desarrollo rural y agrícola y facilitar el desarrollo del sector privado agroalimentario y (b) el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), ejecutor de las estrategias de desarrollo rural.

a. Subcomponente 2.A: Fortalecimiento institucional del MAG

- 2.20 La estrategia de fortalecimiento se basa en apoyar al Ministerio del Agricultura y Ganadería (MAG), que tiene limitaciones, en su presente estructura, para ejercer sus funciones. Durante la etapa de preparación fueron analizadas sus necesidades de fortalecimiento, específicamente para: (a) establecer la nueva institucionalidad del sector agropecuario, mediante el desarrollo de su estructura orgánica y su relación con las entidades del sector; (b) contribuir al desarrollo de capacidades analíticas para la formulación de políticas y para dar seguimiento al comportamiento del sector; (c) contribuir a la construcción de capacidad para el mejoramiento de la gestión institucional.
- 2.21 En materia de reforma del Estado, está pendiente la presentación y aprobación por la legislatura, de una nueva ley de organización del Poder Ejecutivo. En dicha ley se redefinirán las funciones y la estructura del sector público agropecuario, brindándose al MAG facultades para el ejercicio de la rectoría sectorial. El proyecto de ley que fue conocido por el equipo de proyecto, incorpora los lineamientos básicos sugeridos en las recomendaciones del análisis institucional del sector público agropecuario, efectuado por el consultor especialista del equipo, durante la preparación del programa. Consecuentemente, el plan de fortalecimiento diseñado se compagina con lo propuesto en dicho proyecto de ley.
- 2.22 Las actividades de fortalecimiento diseñadas, integran un conjunto de acciones dirigidas a perfeccionar un ciclo, integrado por: (a) estrategias para el sector acordes con las políticas macroeco-

nómicas y la estrategia global del gobierno; (b) políticas específicas para los distintos aspectos que integran la política sectorial: desarrollo rural, generación y transferencia de tecnología, servicios al productor; (c) mecanismos institucionales para la formulación de programas y proyectos y su ejecución, incluyendo la reformulación de marcos normativos, la definición de las nuevas estructuras, la identificación de los perfiles del personal requerido, las tecnologías a utilizar y las normas a establecer. El componente brinda aportes en dos de las etapas de este ciclo: formulación de políticas específicas y diseño institucional. No se incluyen acciones adicionales para la implementación de los diseños pues aún no se cuenta con los mismos.

b. Subcomponente 2.B:Fortalecimiento institucionaldel PNDR

- 2.23 El Banco apoyará el fortalecimiento institucional del PNDR en el contexto de su gerenciamiento y control interno. Con base en el análisis realizado del PNDR, se han detectado las necesidades de fortalecimiento y preparado un plan de asistencia técnica, dirigido al mejoramiento de las siguientes funciones: (a) Sistema de información gerencial (SIG), evaluación y diseño; (b) mejoramiento de la operación de la unidad de auditoría interna; (c) evaluación de proyectos, actualización y capacitación; (d) auditoría ambiental; (e) diseño, levantamiento y análisis de una encuesta para establecer la línea de base para la evaluación de resultados del programa. Se ha considerado necesario además, efectuar una evaluación de medio término del componente de desarrollo rural del programa en el segundo año de ejecución. Durante esta evaluación se prestará especial atención a revisar la compatibilización y coordinación entre las estrategias y programas del Fondo Social de Emergencia (FIS) y las del PNDR.

C. Marco Lógico

- 2.24 En el anexo I-1 se presenta el resumen del marco lógico del programa, con los indicadores verificables objetivamente para analizar el avance logrado de cumplimiento de los objetivos principales del programa y su impacto en el empleo e ingreso rural, el producto sectorial agropecuario y el valor agregado real total en las áreas de cobertura. Las metas cuantitativas de los indicadores de propósito y objetivos, serán definidas una vez ejecutada y analizado los resultados de la encuesta para establecer la línea de base. Dada la naturaleza de gerenciamiento por la demanda del programa, no es factible determinar a priori metas cuantitativas del componente de desarrollo rural.
- 2.25 Los términos de referencia de la encuesta han sido acordados con el Banco y la misma se realizará dentro del primer año de la fecha del contrato de préstamo. La encuesta de hogares proveerá además la información de base para evaluar los resultados ex-post del programa.

D. Costo y financiamiento del Programa

- 2.26 Se recomienda el otorgamiento de un préstamo por el equivalente de US\$40 millones de los recursos del Fondo de Operaciones Especiales (FOE). Como excepción a las políticas del Banco, se recomienda el financiamiento de hasta el 26% de los gastos recurrentes; para cubrir los costos del personal profesional y técnico a ser contratado durante los cuatro años previstos para la ejecución del programa. Se utilizarán US\$1.514.000 para este propósito. Durante la ejecución del programa se financiarán los intereses con recursos del préstamo. El costo total del programa propuesto es de US\$44,63 millones, de acuerdo al detalle siguiente:

| CUADRO DE COSTOS DEL PROGRAMA (en miles de US\$) | | | | |
|---|---------------|------------------|---------------|---------------|
| CATEGORIAS DE INVERSION | BANCO FOE | PRESTA- TARIO | TOTAL | % |
| I. ADMINISTRACIÓN DEL PNDR: | 2.573 | 4.240 | 6.814 | 15,3% |
| 1.1 Gastos Administrativos | 1.514 | 4.240 | 5.754 | 12,9% |
| 1.2 Consultorías y Capacitaciones | 651 | 0 | 651 | 1,5% |
| 1.3 Vehículos y Equipo | 409 | 0 | 409 | 0,9% |
| II. APOYO AL DESARROLLO RURAL (PNDR): | 34.641 | 0 | 34.641 | 77,6% |
| 2.1 Capacitación de Entidades Participantes | 3.464 | 0 | 3.464 | 7,8% |
| 2.2 Apoyo a la Producción Sustentable | 31.177 | 0 | 31.177 | 69,9% |
| III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MAG: | 1.569 | 0 | 1.569 | 3,5% |
| 3.1 Consultorías y Capacitaciones | 1.249 | 0 | 1.249 | 2,8% |
| 3.2 Equipamiento | 320 | 0 | 320 | 0,7% |
| IV. GASTOS FINANCIEROS | 1.217 | 389 | 1.606 | 3,6% |
| 4.1 Intereses | 817 | 0 | 817 | 1,8% |
| 4.2 Comisión de Crédito | 0 | 389 | 389 | 0,9% |
| 4.3 Inspección del Banco (FIV) | 400 | 0 | 400 | 0,9% |
| TOTAL | 40.000 | 4.630 | 44.630 | 100,0% |
| Porcentajes | 89,6% | 10,4% | 100,0% | |

- 2.27 Se propone reconocer hasta el equivalente de US\$300.000 con cargo al financiamiento, por inversiones elegibles efectuadas antes de la fecha de elegibilidad de desembolsos, para la contratación de los servicios de consultoría necesarios para el desarrollo de actividades prioritarias de los componentes de fortalecimiento institucional del MAG y del PNDR.
- 2.28 **Anticipo de Fondos.** Se propone que el anticipo de fondos sea de hasta el 10% de los recursos del financiamiento. Este monto se justifica dado el ritmo de ejecución del PNDR en la fase anterior.

- 2.29 El valor máximo de cada proyecto no excederá de US\$650.000 y las adquisiciones de bienes requeridos por el programa no excederán de US\$200.000, por ende no se anticipa que habrán licitaciones públicas internacionales.

III. EJECUCION DEL PROGRAMA

A. Entidad PNDR

- 3.1 Desde su creación a principios de 1995 y con el apoyo del Banco, el PNDR se ha conformado como una organización apta para el financiamiento de inversiones no reembolsables de beneficio mayoritario de pequeños y medianos productores agrícolas. En los tres años desde su creación, el PNDR ha llegado de manera efectiva a dichos sectores con recursos destinados al financiamiento de rehabilitación de caminos rurales, proyectos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología, obras comunales de comercialización e inversiones en aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales.
- 3.2 En la primera fase del programa, el PNDR ha tenido una elevada dependencia en recursos del financiamiento del Banco para cubrir: (a) casi la totalidad de los gastos de inversión; y (b) un elevado porcentaje de los gastos administrativos, incluyendo el 100% de los salarios y viáticos del personal permanente de la institución. Con el objeto de garantizar la sostenibilidad institucional más allá de la vida de la presente operación, se propone modificar esta situación. Teniendo en cuenta los problemas del déficit fiscal, se ha preparado un plan de aportes presupuestarios, según el cual el gobierno central incrementará de manera gradual el financiamiento de los gastos administrativos del PNDR de un 25% en el primer año hasta un 100% en el cuarto año de ejecución del programa.
- 3.3 Como parte del proceso de evaluación de la primera fase, se han identificado áreas que requerirán intervenciones en términos de fortalecimiento institucional dirigidas a: (a) mejorar la eficiencia y capacidad administrativa en el manejo del ciclo de proyectos; (b) reforzar los procesos y mecanismos de control interno; y (c) fortalecer la capacidad de promover diálogos y procesos a nivel comunitario que conlleven al establecimiento de prioridades de desarrollo y la identificación de ideas de proyecto. El componente de Apoyo al Desarrollo Rural del presente Programa financiará la totalidad de dichos gastos de fortalecimiento institucional.
- 3.4 Atendiendo lo expresado en el memorandum RE1/DAU-M-013 del 19 de junio de 1997, que establece que los equipos de proyecto y las representaciones deben realizar una evaluación financiera de la entidad ejecutora para considerar la posibilidad de delegarle la responsabilidad de mantener la custodia de la documentación de soporte de los desembolsos de los recursos del programa, se realizó la evaluación de gestión institucional, teniendo en cuenta dicha posibilidad. Se estima que al PNDR sería un buen candidato para delegarle tal responsabilidad, una vez ejecutadas las actividades para corregir las áreas que requieren ajustes. A tales fines, se propone efectuar una revisión del cumplimiento del plan de fortalecimiento en un período de un año a partir de la fecha del contrato de préstamo.

B. El ciclo del componente de Apoyo al Desarrollo Rural

- 3.5 El componente de Apoyo al Desarrollo Rural se implantará bajo la modalidad de Proceso de Programación por Etapas (PPE), mediante la cual se divide la ejecución del componente en cuatro Planes Operativos Anuales (POA). Dichos planes serán el resultado de un proceso de consolidación de la cartera de proyectos aprobados en los distintos departamentos cubiertos por el PNDR. Al final de cada período o etapa, se evaluarán los resultados alcanzados.
- 3.6 El POA debe incluir los siguientes aspectos: (a) las inversiones evaluadas y jerarquizadas a ser financiadas en la gestión, incluyendo su estructura de financiamiento y cronograma de ejecución; (b) la distribución de los proyectos a nivel de departamentos, municipios y comarcas; (c) el cronograma de implantación de las acciones de fortalecimiento institucional incluida la adquisición de bienes y servicios, como la contratación de consultorías y servicios de capacitación; (d) el plan de actividades de capacitación a las comunidades en aspectos de participación comunitaria; y (e) el plan anual de auditoría interna.
- 3.7 Como parte de la preparación del componente de Apoyo al Desarrollo Rural, se ha revisado y modificado el Reglamento Operativo del PNDR. La reformulación comprende: (a) un mejor control de los mecanismos de ejecución de proyectos y de captación de la demanda; y (b) un manejo más riguroso de los procedimientos de control interno de la institución que garanticen la efectividad en la administración de los recursos asignados al componente. Será requisito para el primer desembolso que dicho reglamento haya sido puesto en ejecución en forma satisfactoria al Banco.

C. El ciclo de proyectos del componente de Apoyo al Desarrollo Rural

- 3.8 La ejecución de los proyectos tendrá la siguiente secuencia, que se describe en detalle en el Reglamento Operativo: (a) la Sede Central y las Agencias Departamentales de Desarrollo Rural (ADDR) del PNDR pondrán en marcha estrategias de divulgación del componente a nivel local; (b) el PNDR responderá a solicitudes de las comunidades para apoyarles en el proceso de identificación de prioridades de desarrollo rural; (c) las comunidades y/o organizaciones de beneficiarios identificarán los proyectos y los presentarán a las ADDR; (d) las ADDR determinarán la elegibilidad de las ideas de proyecto de las comunidades en base a filtros técnicos y al menú de inversiones financiables por el componente; (e) los proyectos elegibles serán jerarquizados por los Comités de Desarrollo Municipal (CDM); (f) la jerarquización de proyectos y sus costos serán comparados con la asignación indicativa de financiamiento para el Municipio; (g) los beneficiarios elaborarán perfiles de proyecto según las guías del PNDR y, de ser necesario, procederán a la elaboración de estudios de factibilidad; y (h) las ADDR evaluarán los perfiles de proyecto y estudios de factibilidad y, de cumplir con los criterios de evaluación social, económica y técnica, pasarán a distintas instancias de aprobación.

- 3.9 Se propone un techo de financiamiento por proyecto del equivalente de US\$300.000, cuando el aporte comunitario se mantiene en el mínimo del 10% indicado en el Reglamento Operativo. Sin embargo este techo podría ser subido en función de un mayor aporte de comunitario. Por cada US\$10.000 adicionales que aportará la comunidad, arriba del mínimo de US\$30.000, para proyectos grandes, el techo podría elevarse en US\$50.000, hasta un máximo de US\$550.000. La misma regla sería aplicable a los proyectos de alcance multimunicipal, pudiéndose subir el techo de esta manera hasta US\$650.000. El PNDR aplicará un criterio adicional, de que el costo de los proyectos no sobrepase del equivalente de US\$2.000 por beneficiario. Por otra parte, cuando los beneficios sean de apropiación privada, solo podrán ser elegibles como beneficiarios, los pequeños y medianos productores.
- 3.10 Los proyectos elegibles cuyo costo con recursos del PNDR sea **igual o inferior a US\$100.000** podrán ser aprobados, por delegación del Director Ejecutivo, por el Director de la ADDR con el respaldo de informe de evaluación técnica del personal pertinente de la Agencia. Los proyectos cuyo costo con recursos del PNDR sea **superior a US\$100.000 y menor o igual a US\$300.000** deberán ser aprobados por el Director Ejecutivo y respaldados por informes de evaluación técnica de las ADDR y revisión por parte de la Dirección de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera de la Sede Central. Los proyectos cuyos montos **superen los US\$300.000**, pasarán por las instancias anteriores, y la aprobación final quedará a cargo del Consejo Directivo. Los proyectos aprobados en esta última categoría serán sometidos a la no objeción por parte del Banco.
- 3.11 Con los proyectos evaluados y aprobados de acuerdo al proceso anterior se conformará el POA, el cual será consolidado por la Dirección de Planificación. El Director Ejecutivo presentará el POA al Consejo Directivo para su aprobación y su posterior envío al Banco para su revisión y eventual declaratoria de no objeción, antes del 31 de octubre de cada año.
- 3.12 El PNDR operará a través de Entidades Promotoras (EP) y Entidades Administradoras (EA), las cuales compartirán responsabilidades con el PNDR y los beneficiarios durante la promoción y ejecución de los proyectos. Las EP apoyarán a las comunidades beneficiarias en los procesos de diálogo interno dirigidos al logro de mayores niveles de desarrollo local y los apoyarán en la identificación, preparación y presentación de ideas de proyecto al PNDR. Las EA serán responsables de la ejecución de los proyectos y/o la supervisión del desempeño de los contratistas, y de la administración de los recursos que les han sido asignados por el PNDR y los beneficiarios para la ejecución de los proyectos. De cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento Operativo en relación a aspectos administrativos, financieros y técnicos, las EP podrían calificar como EA. El PNDR será responsable de vigilar el cumplimiento de contratos, incluyendo su formulación, ejecución, contratación, operación y logro de objetivos. Los técnicos de las

ADDR, conjuntamente con supervisores privados, realizarán un seguimiento del avance y calidad de las obras, para lo cual utilizarán fichas de control específicamente diseñadas.

- 3.13 La operación y mantenimiento de los proyectos concluidos serán responsabilidad de las comunidades beneficiarias, las cuales suscribirán obligaciones contractuales con el PNDR. En los proyectos con características de bien público, como la rehabilitación de caminos rurales, la operación y mantenimiento de los proyectos serán responsabilidad compartida de las comunidades beneficiarias y de los municipios.

D. Monitoreo de la ejecución del componente de Apoyo al Desarrollo Rural

- 3.14 El monitoreo del componente se basará en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y actividades en términos de: (a) ejecución de las inversiones; (b) seguimiento del funcionamiento de los mecanismos administrativos y de control y otros aspectos institucionales; (c) implantación del componente de fortalecimiento institucional; y (d) implantación de las labores de capacitación a nivel de municipio y comunidad.
- 3.15 El monitoreo para verificar el cumplimiento de los criterios técnicos, administrativos, financieros, económicos y ambientales acordados entre el Banco y el PNDR se realizará de la siguiente manera: (a) el PNDR presentará al Banco informes semestrales consolidados sobre la ejecución y avance del componente, incluyendo informes de seguimiento y evaluación; de evaluación y monitoreo ambiental de proyectos ejecutados y en ejecución; de ejecución de los POA en sus distintos ámbitos; de auditoría interna y de implantación de medidas correctivas; y (b) en caso de encontrarse observaciones o que la ejecución del componente por parte del PNDR no sea satisfactoria, el PNDR deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Banco manifieste sus objeciones, las medidas correctivas a ser tomadas por la institución y su cronograma de implantación.
- 3.16 El PNDR deberá mostrar capacidad de ejecución de un volumen adecuado de proyectos dentro de las metas anuales establecidas en los POA, el presupuesto institucional, la disponibilidad de recursos del financiamiento del Banco y de contrapartida, y la capacidad operativa instalada de la institución. La Dirección de Planificación del PNDR, a través del Sistema de Evaluación, Seguimiento y Control será responsable de: (a) avalar la calidad del proceso de planificación y consolidación de la demanda de proyectos en los distintos departamentos; (b) poner en marcha el proceso de inversión; (c) verificar la calidad de la cartera de proyectos; y (d) a través de su Sistema de Seguimiento y Evaluación, asegurar que las EA operen sistemas de seguimiento de inversiones satisfactorios a la institución. A su vez, el PNDR, a través de las ADDR y la Dirección Administrativa Financiera, realizará un seguimiento estricto del manejo de los recursos asignados a las EA por medio de los contratos suscritos para la ejecución de los proyectos.

E. Ejecución y monitoreo del Subcomponente A Fortalecimiento Institucional del MAG

- 3.17 El componente de fortalecimiento institucional del MAG sería ejecutado en un período de dos años. El MAG contratará a un profesional de buen nivel, como coordinador de la ejecución del componente, a satisfacción del Banco, quien trabajará a tiempo completo en la implantación de las actividades programadas. Sus honorarios serán pagados con recursos del financiamiento. Sus funciones principales incluirían: (a) coordinar y dirigir, junto con personal pertinente del MAG, la implantación del componente de fortalecimiento institucional propuesto de acuerdo a objetivos, metas y plazos; (b) realizar el seguimiento de la ejecución del componente y de la calidad de los servicios de consultoría, capacitaciones y adquisición de bienes y servicios con recursos del financiamiento y su incorporación a los sistemas administrativos y operativos del MAG; y (c) proponer acciones correctivas durante el proceso de implantación.
- 3.18 El monitoreo se realizará en base a mediciones periódicas del cumplimiento de metas, tanto en términos de tiempo como de calidad, las cuales serán acordadas con el Banco. El monitoreo del componente de Fortalecimiento se basará en la presentación por parte del MAG al Banco, a través del coordinador, de informes semestrales sobre la ejecución y avance del proceso de implantación. Dichos informes deberán incluir lo siguiente: (a) de avance de ejecución presupuestario y físico, respecto a la contratación de consultorías, capacitaciones y adquisición de bienes y servicios; (b) de incorporación de los bienes y servicios adquiridos con recursos del componente a los sistemas operativos, administrativos y de planificación del MAG; (c) informe de auditoría elaborado por la Unidad de Auditoría Interna del MAG, incluyendo aspectos de control administrativo, de procedimientos y de ejecución presupuestaria/financiera; y (d) informes de implantación de medidas correctivas necesarias.
- 3.19 En caso de encontrarse observaciones y/o que la ejecución del componente por parte de la institución no sea satisfactoria al Banco, el MAG, a través del Coordinador, deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Banco manifieste sus objeciones, las medidas correctivas a ser tomadas por la institución y un cronograma de instrumentación o ejecución de las mismas.

IV. EL PRESTATARIO, EL EJECUTOR Y OTROS ORGANISMOS PARTICIPANTES

A. El prestatario y el ejecutor

- 4.1 El prestatario sería la República de Nicaragua y los ejecutores el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), ambas instituciones son miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CONAGRO), entidad creada por el Decreto 36-92 y presidida por el Ministro de Agricultura y Ganadería para fortalecer la vinculación formal de las instituciones claves del Sector Público Agropecuario.

B. El PNDR

- 4.2 El Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), fue creado por Decreto 41-94, el 4 de octubre de 1994, como entidad del Sector Público dependiente de la Presidencia de la República, con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa y de gestión, y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
- 4.3 El Decreto de creación establece que el PNDR es una entidad de carácter transitorio, con una duración de 15 años, prorrogables. Su objetivo es mejorar la capacidad en las entidades públicas y privadas para generar y promover el desarrollo rural sustentable, en beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios y de los trabajadores agrícolas. Su permanencia y sostenibilidad en el largo plazo está en función de la necesidad del país de contar con una entidad especializada para promover el desarrollo rural y de la eficiencia y efectividad de la institución para contribuir al desarrollo rural sustentable en términos económicos, sociales, institucionales y ambientales.
- 4.4 El PNDR es la agencia ejecutora de la primera fase del programa de desarrollo rural financiado por el Banco. Adicionalmente, y de acuerdo al mandato que le da su decreto de creación, el PNDR coordina las acciones de proyectos de desarrollo rural financiados por otras organizaciones principalmente de ayuda bilateral, y multilaterales especializadas como el Fondo Internacional de Desarrollo de la Agricultura (FIDA). Algunos de estos programas y proyectos reciben recursos vía monetización de donativos en especie, como maquinarias e insumos, que son vendidos para generar fondos de contravalor y son transferidos a la población meta, en forma de crédito, insumos o asistencia técnica, por diversos intermediarios, como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, intermediarios financieros no convencionales y municipios.
- 4.5 Cada programa tienen su propio mecanismo de ejecución y su propia unidad ejecutora. La labor de coordinación del PNDR consiste en vigilar que se cumpla con lo establecido en los distintos convenios de financiamiento. El PNDR destina a un equipo de seis personas,

tres técnicos en la Sede Central (Unidad de Seguimiento y Coordinación) y tres en la agencia ADDR, en el departamento de León, para atender la coordinación de estos programas.

- 4.6 Como entidad ejecutora del componente de Apoyo al Desarrollo Rural del Programa, el PNDR tendrá la responsabilidad principal de ejecución y supervisión de la implantación del componente. El PNDR será responsable por el manejo eficiente y transparente de los fondos asignados al componente y por el estricto cumplimiento de las normas del financiamiento, incluyendo la aplicación del Reglamento Operativo y los acuerdos establecidos para el seguimiento de la operación.

1. Estructura organizacional

- 4.7 El PNDR cuenta en la actualidad con una estructura organizativa de carácter funcional y adecuada para la ejecución del componente de desarrollo rural del programa. La estructura del PNDR incluye: (a) el Consejo Directivo; (b) la Dirección Ejecutiva; (c) la Dirección Administrativa Financiera; (d) la Dirección de Planificación; (e) las Agencias Departamentales de Desarrollo Rural (ADDR); (f) la Unidad de Auditoría Interna y (g) la Unidad de Coordinación y Seguimiento.
- 4.8 El **Consejo Directivo** del PNDR representa la máxima autoridad de la institución y está integrado por nueve miembros provenientes del sector público, sector no gubernamental y sector privado, quienes ejercen sus funciones con carácter ad-honorem. El **Director Ejecutivo** tiene la representación legal del PNDR y es responsable por la dirección y administración del funcionamiento de la institución.
- 4.9 La función principal de la **Dirección Administrativa Financiera** es brindar apoyo administrativo, logístico y financiero-contable a las distintas unidades del PNDR para el eficiente desarrollo de sus actividades y funciones. Las **Unidades de Presupuesto y Contabilidad** de la Dirección Administrativa Financiera, realizan la consolidación mensual del movimiento de la ejecución presupuestaria y contable y la elaboración de los estados financieros. Como resultado de la evaluación efectuada en la preparación de la operación, se realizarán los ajustes recomendados para integrar los sistemas de presupuesto y contabilidad a través de un sistema de información gerencial; se efectuará un seguimiento más riguroso de la contabilización de los aportes de los beneficiarios, y se implantará una base de datos de costos unitarios que permitan mejores estimaciones de los costos en que incurren las agencias regionales para la ejecución de proyectos.
- 4.10 Las funciones principales de la **Dirección de Planificación** incluyen la elaboración de planes operativos anuales, la promoción, coordinación y seguimiento de los proyectos, y el apoyo a las ADDR en el manejo efectivo del ciclo de proyectos. Como parte del componente de fortalecimiento institucional de la presente operación, se

destinarán los recursos necesarios para fortalecer el sistema de evaluación y seguimiento de proyectos y su integración al sistema de información gerencial.

- 4.11 Las **ADDR** son las unidades operativas del PNDR a nivel departamental y, de esta manera, su función principal es lograr los objetivos y metas del PNDR en relación a cada uno de los departamentos en los cuales opera el Programa. En la actualidad, el PNDR cuenta con cinco ADDR situadas en las capitales de los departamentos de Boaco, Chontales, Jinotega, Matagalpa y León. La ADDR de León realiza exclusivamente actividades de seguimiento de otros proyectos coordinados por el PNDR en la zona. Para la presente operación, se discontinuaría la dotación de recursos financieros a la agencia de León, integrada por un grupo de dos técnicos y una secretaria, para la cual, el PNDR obtendrá financiamiento independiente del gobierno central o de la entidad financiadora del proyecto coordinado en esa zona.
- 4.12 A fin de atender las necesidades derivadas de la ampliación de la cobertura del programa, se apoyará el establecimiento de una nueva ADDR localizada en la cabecera departamental de Estelí, la cual atendería a los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí. A su vez, la ADDR de Chontales que actualmente tiene cobertura de los departamentos de Chontales y seis municipios de Zelaya Central, atendería a un departamento adicional, a Río San Juan. La Sede Central en Managua atenderá a los departamentos de Managua, Carazo y Rivas, en los que opera el programa PROCESUR, financiado por el FIDA, organismo que ha establecido además una unidad ejecutora para el desarrollo de su programa. Como condición previa al primer desembolso, el PNDR deberá demostrar que ha establecido la ADDR para Nueva Segovia, Madriz y Estelí y que ésta cuenta con el equipo necesario para cumplir con sus responsabilidades.
- 4.13 Las funciones de la **Unidad de Auditoría Interna**, incluyen: (a) la fiscalización preventiva de las operaciones y registros contables, financieros y administrativos del PNDR, del cumplimiento de los procedimientos institucionales y la formulación de sugerencias sobre acciones correctivas; y (b) efectuar revisiones concurrentes de los proyectos en ejecución y ejecutados. Como parte del componente de fortalecimiento institucional de la presente operación, se reforzará la capacidad de la Unidad para llevar a cabo sus funciones de manera más efectiva.

2. Auditoría externa

- 4.14 Los estados financieros del PNDR y del programa, serán dictaminados anualmente por **auditores externos** independientes aceptables al Banco. La Representación del Banco en Managua está iniciando una serie de programas de orientación, dirigidos a auditores externos sobre requerimientos del Banco en relación a los exámenes anuales de auditoría externa, tanto en términos de procedimientos contables, financieros y de control interno en general. Para la presente fase, se pedirá la presentación de los exámenes de

auditoría externa bajo los lineamientos a ser establecidos en dichos programas.

3. Personal

- 4.15 En la actualidad, la oficina central del PNDR cuenta con una planilla de personal compuesta por 15 profesionales y técnicos, siete auxiliares y nueve personas de apoyo, incluidas secretarias, choferes y personal de mantenimiento en la Sede Central. Por su parte, 28 profesionales y técnicos y 12 secretarias, personal de seguridad y mantenimiento conforman la planilla de las ADDR. El total de personal técnico y profesional es de 43 (61%), de un total de 71 personas que forman parte de la planilla total de la institución.
- 4.16 Se propone mejorar el desempeño de los recursos humanos de la institución. Para tal propósito, y como parte del proceso de preparación, se ha realizado una revisión de los manuales de funciones y se racionalizará el personal técnico existente, principalmente a través de la eliminación de duplicidad de funciones y/o compartiendo personal profesional y técnico entre agencias ADDR y Sede Central. Se incorporarán al personal de las ADDR del PNDR, por un período de dos años, a cinco promotores de participación comunitaria. Su función será la divulgación del programa y la promoción de la participación de las comunidades en el proceso de identificación de proyectos. A su vez, y con el objeto de llevar a cabo un mayor control de impacto ambiental de los proyectos, se incorporarán al cuadro técnico de las ADDR a tres especialistas ambientales adicionales. Respecto a la nueva ADDR del departamento de Estelí, se contrataría el personal necesario para su funcionamiento y presentaría una estructura similar a la de las ADDR existentes.

4. Ejecución presupuestaria acumulada y compromisos

- 4.17 Desde su inicio en 1995 hasta junio 30 de 1997, fecha de cierre utilizada para la presente evaluación de la ejecución presupuestaria del PNDR, de un total de US\$33,4 millones de la operación vigente (US\$30,0 millones del préstamo del Banco y US\$3,4 millones de fondos de contrapartida local), se habían ejecutado un total de US\$13,5 millones, de los cuales: (a) US\$3,6 millones (27%) corresponden a gastos de operación y fortalecimiento del PNDR; (b) US\$9,5 millones (70%) a gastos de inversión en fortalecimiento y capacitación de EP, EA, municipios e inversiones en proyectos; y (c) US\$0,4 millones (3%) a gastos financieros. adicionalmente, a dicha fecha, el PNDR ya tenía comprometidos un total de US\$9,4 millones para el período julio de 1997 a diciembre de 1998, de acuerdo al siguiente detalle: (a) US\$2,4 millones (26%) para gastos de operación y fortalecimiento del PNDR; (b) US\$6,1 millones (65%) para gastos de inversión entre inversiones en capacitación de EP, EA, comunidades, municipios y proyectos de inversión; y (c) US\$0,9 millones (9%) para gastos financieros.

C. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

1. Antecedentes

- 4.18 El MAG opera bajo Decreto Ley 1-90, el cual le confiere las siguientes responsabilidades principales: (a) liderar y coordinar el Consejo Nacional Agropecuario (CONAGRO); (b) ejercer funciones de rectoría de las políticas sectoriales; (c) definir las prioridades de intervención en el sector agrícola; (d) distribuir y coordinar funciones con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA); (e) proveer servicios sanitarios de protección animal y vegetal y de control fitozoosanitario; (f) producir estadísticas e información sobre mercados y precios en el ámbito agrícola y ganadero; y (g) apoyar el desarrollo del sector privado agropecuario.
- 4.19 En la actualidad, las responsabilidades por el manejo y conservación de los recursos naturales corresponden al MARENA, las de reforma agraria al INRA y las de investigación y extensión agrícola y ganadera al INTA. Sin embargo, existe cierta duplicación de esfuerzos, especialmente en los aspectos relacionados el manejo de los recursos naturales renovables. Existen problemas de coordinación operacional de las entidades del sector, una falta de mecanismos en el MAG para ejercer sus funciones de rectoría de las políticas sectoriales, superposiciones y vacíos en la ejecución de funciones, y programas que no responden a un marco de políticas comunes de desarrollo rural, agrícola y ganadero.

2. Sistema de información

- 4.20 El MAG carece en la actualidad de un sistema computacional moderno para el manejo de información y dar seguimiento a los planes y programas de las entidades del sector. Las tareas de administración del sistema se encuentran a cargo de personal poco tecnificado, lo que impide llevar a cabo tareas de manejo del sistema de información gerencial de manera efectiva.

3. Objetivos del fortalecimiento institucional del MAG

- 4.21 El plan de fortalecimiento institucional diseñado, tiene por propósito facilitar al MAG los elementos necesarios para resolver estos problemas. Como resultado de su ejecución, el MAG podrá: (a) establecer una nueva institucionalidad para el sector agropecuario, mediante el desarrollo de su nueva estructura orgánica y su nueva relación con las entidades del sector; (b) contribuir a la construcción de capacidad analítica para la formulación de políticas y dar seguimiento al comportamiento del sector; y (c) contribuir al desarrollo de capacidad para el mejoramiento de la gestión institucional.

V. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA

A. Viabilidad técnica

- 5.1 El Programa se fundamenta en la experiencia lograda en la primera fase y su evolución económica. Como se ha indicado en el Capítulo II, las inversiones elegibles corresponden a proyectos relativamente simples, que utilizan tecnologías conocidas y aplicadas en Nicaragua tanto por el PNDR, en la ejecución de la anterior fase del Programa, como en otros proyectos y programas financiados por el Banco y por otros donantes. Tanto en su etapa de preparación o diseño como también en la ejecución, los proyectos se ajustan a los criterios, normas y especificaciones técnicas indicadas en el Reglamento Operativo.
- 5.2 Los aspectos técnicos específicos a aplicar en cada caso, dependen de la naturaleza y características de los diversos tipos de proyecto. Así por ejemplo, cuando existe normatividad nacional para la ejecución de obras de uso público, como es el caso de los proyectos de rehabilitación de caminos rurales, se aplican las normas y especificaciones del Ministerio de Construcción y Transporte (MCT) para el diseño y construcción de caminos de similar categoría. En los proyectos de transferencia de tecnología, el contenido de los paquetes tecnológicos a ser diseminados corresponde a tecnologías comprobadas, desarrolladas para las condiciones agroecológicas en las cuales serán utilizadas. Tanto los paquetes tecnológicos como la idoneidad profesional de los técnicos que realizarán la transferencia, serán validados y acreditados respectivamente, por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los servicios de transferencia serán proporcionados por firmas o profesionales individuales privados, en forma consistente con el criterio del programa de fomentar el desarrollo de servicios privados de asistencia técnica. El mejoramiento de la base de recursos productivos, las prácticas de manejo de recursos naturales estarán basadas en tecnologías como las forestales y agroforestales, desarrolladas para Nicaragua y otros países de Centroamérica, por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), y por instituciones locales como la Universidad Agraria Nacional.
- 5.3 Las visitas de inspección realizadas por personal técnico del Banco a diversos proyectos ejecutados y en ejecución, permitieron comprobar la solidez técnica de los proyectos. Para esta segunda fase del Programa, los criterios de selección han sido reforzados y expresados en forma mas explícita, lo cual deberá resultar en una cartera de proyectos aún mas sólida.

B. Viabilidad institucional y operativa

- 5.4 La porción ejecutada de la primera fase del programa ha permitido comprobar que la institución ejecutora del componente de Apoyo al Desarrollo Rural, el PNDR, tiene la organización institucional

competente y adecuada para su ejecución. Con base en la experiencia adquirida, en esta segunda fase se propone fortalecer la participación comunitaria y su expresión de prioridades de desarrollo, por medio de los Comités de Desarrollo Municipal. Dichos comités existen ya en un porcentaje de los municipios del área de cobertura de la segunda etapa.

- 5.5 Entre las medidas adoptadas para fortalecer la participación comunitaria, está la contratación de expertos en promoción social, para trabajar directamente con los grupos comunitarios; la ampliación del ámbito de las Entidades Promotoras y la inclusión de medidas de retroalimentación para mejorar el proceso de presentación y preparación de ideas y perfiles de proyecto.

C. Viabilidad ambiental

- 5.6 A fin de comprobar la viabilidad ambiental del programa se efectuó la evaluación de impactos con base en un análisis de una muestra de 44 proyectos, así como la revisión de los procedimientos ambientales que aplica el Sistema de Procedimientos Ambientales para el Desarrollo Rural (SISPADRU). Dicha evaluación permitió: (a) comprobar la solidez de los procedimientos que se están aplicando y proponer algunos ajustes, como incluir el seguimiento centralizado de control ambiental en el nuevo sistema de seguimiento y evaluación; (b) proponer actividades de capacitación sobre el SISPADRU a técnicos del PNDR, entidades promotoras y administradoras, contratistas y supervisores de obras en los departamentos en donde se ampliará el programa; (c) proponer la contratación de tres técnicos adicionales para atender los departamentos de cobertura del programa, que formarán parte del personal de las ADDR; (d) incluir en el diseño del Sistema de Seguimiento y Evaluación, el seguimiento del control ambiental de los proyectos; y (e) considerar la ejecución de una auditoría ambiental en el plan de fortalecimiento institucional del PNDR.
- 5.7 En el Reglamento Operativo se presenta la tipología de actividades y proyectos elegibles de financiamiento y sus requisitos de evaluación ambiental, incluyendo indicaciones sobre su manejo y mantenimiento.

- 5.8 La política de desarrollo rural que persigue el programa tiene por objetivo el crecimiento económico y la reducción de la pobreza de la población rural del área meta. Desde el punto de vista ambiental, persigue el manejo sustentable de los recursos naturales y la recuperación y protección de los recursos en proceso de degradación.

D. Viabilidad financiera

- 5.9 Se han tomado medidas para garantizar la sostenibilidad institucional y financiera del programa mediante un plan que incrementa los aportes de contrapartida para cubrir los gastos administrativos del programa. Adicionalmente, se contabilizarán los aportes de las

comunidades beneficiarias al financiamiento de los proyectos y se buscará incrementar su participación.

E. Viabilidad económica

- 5.10 Para analizar la viabilidad económica del Componente de Apoyo al Desarrollo Rural, se han considerado especialmente la conformación de la población meta, constituida por medianos y pequeños productores con capacidad de generar excedentes. El Programa no está formulado con una óptica asistencialista, por este motivo requiere que los proyectos demandados por los beneficiarios se encuentren debidamente justificados y evaluados.
- 5.11 Como parte de las actividades de preparación de la operación, se preparó una revisión de los resultados del financiamiento durante la primera fase. La revisión consta de un componente de evaluación económica para aquellos proyectos que por norma deben contar con un estudio de factibilidad, tal es el caso de los caminos rurales y obras de infraestructura, así como un examen sobre los principales resultados de una evaluación de impacto llevada a cabo de manera simultánea con el proceso de preparación.

1. Elementos metodológicos de la evaluación económica

- 5.12 Para propósitos de la revisión y en la perspectiva del análisis de la cartera prevista para la segunda etapa, la evaluación económica se desarrolló bajo condiciones que permitieran comprobar la solidez de los proyectos y su fortaleza como soluciones económicamente viables. La variedad de la procedencia de los proyectos, sobre todo los de caminos, como diversas condiciones, climatológicas y agroecológicas en que se ubican las zonas de impacto, dificulta la aplicación de pautas uniformes; de tal manera que, en principio, nos encontramos frente a una gama de posibles influencias en los parámetros utilizados, tales como el egreso estimado por mantenimiento, o la ubicación estratégica entre puntos de alto potencial de comercialización, por el lado de los ingresos.
- 5.13 Considerando lo anterior, se procedió al establecimiento de parámetros que soportarán la evaluación económica, tanto de la cartera vigente, como la que se encuentra en proceso, bajo parámetros considerados conservadores, dado que intentan enfocar solamente el efecto de los proyectos sobre los ingresos de los productores. Los criterios de evaluación para los proyectos de rehabilitación de caminos rurales fueron:
- a. El impacto de una obra de infraestructura económica de las características de los caminos rurales, es inmediato, su efecto es previsible e impacta a los ingresos por reducción en los costos de transporte. El transporte normalmente representa el 10% del precio del producto en el mercado; por lo menos, el proyecto tienen el efecto de reducir este costo en un 50%, por lo tanto, proporciona un beneficio equivalente al 5% del valor de la producción cada año. Este supuesto es conservador, ya que a veces antes del proyecto el transporte de carga desde

determinadas zonas no es posible o la vía es intransitable por varios meses del año.

- b. Puesto que el beneficio del proyecto equivale a un incremento del 5% en el precio de los productos a nivel de finca, habrá una respuesta de la oferta. Para calcular dicha respuesta de manera conservadora, se ha usado el supuesto de que la elasticidad de la oferta es de 0,2. Las recopilaciones de evidencia econométrica sobre este parámetro para la agricultura en desarrollo sugieren que el rango de valores para los granos básicos oscila entre 0,2 y 0,5, refiriéndose a la respuesta de corto plazo. Aplicando este supuesto, el incremento de la producción se calcularía en el 1%. En las proyecciones de los efectos de la inversión, se considera un incremento en la producción de esta magnitud en el primer año después de la puesta en servicio de la obra, debido a que la evidencia también sugiere una respuesta rápida de la oferta. Luego se mantiene la producción en este nuevo nivel para cada año del horizonte del análisis.
- c. Se considera que el mero hecho de hacer accesible la finca impacta la utilización de zonas que hasta el momento no se han utilizado o simplemente se encuentran subutilizadas. Para los fines de la evaluación se considera que la magnitud de este efecto es del 1% del área de producción en la zona de influencia del proyecto y se le aplica desde que éste se completa.
- d. Se considera que los efectos de una obra no solamente se circunscriben a la agricultura, sino a todas las ramas de la de actividad económica rural. Se estima que este efecto multiplicador es de alrededor del 70% sobre los ingresos imputados por el aumento en el valor de la producción.
- e. Los factores de ajuste para la evaluación económica se han determinado sobre la base de promedios internacionales, en el caso del precio sombra de la mano de obra, normalmente oscila entre 0,5 y 1,0 del salario. Para las condiciones de Nicaragua, aún sin haber estimado la curva de oferta y demanda de mano de obra, el factor 0,70 responde a sus características de estacionalidad y relativa facilidad migratoria. En cuanto a las divisas, el comportamiento del mercado no muestra restricciones importantes en cuanto al precio de mercado de la divisa, pudiéndose considerar el precio financiero igual al precio sombra.
- f. Se tuvieron en cuenta en el análisis económico los mecanismos de subsidio a los precios. Esta influencia es mínima, sin embargo, debido a que: (i) las bandas de precios han sido eliminadas. De todas formas, no introdujeron distorsiones en los precios, debido a que su efecto promedio en la estructura arancelaria fué de cero, por el diseño mismo del sistema; (ii) el sector agropecuario tuvo poco acceso al sistema anterior de incentivos a la exportación, que benefició mayormente al sector

de manufacturas; (iii) bajo la nueva política de incentivos a la exportación, hay un subsidio más generalizado del 1.5%, pero su efecto es muy pequeño.

- 5.14 Se sabe que estos proyectos generarán beneficios adicionales por medio de otros efectos. Sin embargo, fue necesario utilizar supuestos conservadores para llegar a un estimado mínimo robusto de sus probables resultados.

2. Evaluación económica del componente en su conjunto

- 5.15 Para efectuar la evaluación se partió de los parámetros y factores de ajuste precisados anteriormente y se desarrollaron cálculos de ponderaciones sobre la base de los costos totales de los proyectos, agregando como datos claves los costos de administración del programa y el monto total gastado en inversiones. Así fue posible obtener un estimado mínimo de la TIR económica del programa de 19,8%, un estimado máximo de 33,8% y el estimado más probable es de 27,8%, dentro de un contexto conservador de medición de los beneficios debido a que, como fue precisado, fueron usados supuestos conservadores para el cálculo de las TIRE a nivel de cada proyecto.

- 5.16 La evaluación económica favorable de los proyectos considerados refuerza el hecho de que cumplen con todos los criterios de elegibilidad establecidos por el Programa, tal como aparecen descritos en el Reglamento Operativo. Es de señalar que el impacto del Programa generará diversos beneficios indirectos y efectos positivos de difícil cuantificación. Un avance relevante ha sido la constatación, a través de la información levantada por la evaluación de impacto llevada a cabo durante el mes de septiembre de 1997, que la primera etapa logró notorias repercusiones en la economía local a partir de la ejecución de proyectos, haciendo previsibles impactos similares para la cartera pendiente.

3. Focalización de la demanda

- 5.17 El ámbito de influencia del Programa es amplio, no solamente por el tipo de acciones sino en cuanto a los destinatarios de las mismas. El PNDR tendrá incidencia en 91 municipios de las zonas Central y Pacífica del país, en los cuales se concentran 1,32 millones de personas, el 73% de la población rural de país. De esta población, el 75%, alrededor del 985,000 mil personas, son pobres. Las características de los productores rurales en la zona de influencia del PNDR, son:

- a. **Asalariados**, representan el 43,7%: trabajan como obreros agrícolas en diferentes unidades de producción.
- b. **Pequeños productores**, representan el 41,0% de la población rural, con unidades productivas de hasta 25 manzanas (17,5 Ha), conforman el 76,29% de las propiedades en el área de

influencia del Programa. Constituyen un sector integrado por beneficiarios de Reforma Agraria, con bajos niveles de capitalización, absorben mayormente mano de obra familiar y solo eventualmente fuera de dicho grupo ; su producción está orientada hacia el autoconsumo y tiene potencial de generación de excedentes. . Se trata del estrato de campesinos pobres con potencial de crecimiento que generan el 17% del empleo en el sector rural.

- c. **Medianos productores**, son el 10,5% de las familias rurales, con unidades productivas entre 25 y 100 manzanas (17,5 a 70 Has.), el 17,3% de las propiedades en el área de influencia del Programa. Poseen potencial de absorción de mano de obra adicional. Cuentan con estructuras de producción con ciertos niveles de diversificación que les permite integración al mercado, en condiciones limitadas. Generan el 39% del empleo en el sector rural y tienen una participación del 50% en la generación neta divisas.
- d. **Grandes propietarios**, representan el 4,9% de la población rural, concentrando el 6,58% de las fincas en el área de influencia del Programa. Se localizan principalmente en las zonas cafetaleras y ganaderas; tienen buen acceso a tierras y son propietarios de fincas mayores de 100 Manzanas (más de 70 Has.); tienen buena integración al mercado; son empleadores netos de mano de obra rural.

5.18 Las características por tamaño de finca, indican lo siguiente:

| CARACTERISTICAS GENERALES Y TAMAÑO DE FINCAS (MANZANAS) 1997 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| DEPARTAMENTO | Tamaño de Finca (manzanas) | | | | | |
| | 1 - 4,9 (De sub- sistencia) | 5 - 24,9 (pequeños con excedente) | 25 - 99,9 (Medianos) | 100 - 499,9 (Grandes) | 500 + (Muy Grandes) | Total |
| Nueva Segovia | 12.065 | 8.304 | 3.070 | 460 | 24 | 23.923 |
| Madriz | 11.388 | 5.657 | 1.463 | 257 | 37 | 18.802 |
| Estelí | 17.382 | 5.769 | 2.867 | 531 | 37 | 26.586 |
| Managua | 9.050 | 5.325 | 1.582 | 558 | 118 | 16.633 |
| Granada | 7.992 | 1.645 | 319 | 186 | 48 | 10.190 |
| Carazo | 7.655 | 3.192 | 757 | 227 | 30 | 11.861 |
| Rivas | 10.516 | 3.760 | 1.150 | 441 | 93 | 15.960 |
| ZC Oeste | 4.099 | 1.847 | 6.835 | 2.923 | 148 | 15.852 |
| Boaco | 11.067 | 3.855 | 3.194 | 1.571 | 117 | 19.804 |
| Chontales | 2.514 | 2.629 | 4.559 | 2.269 | 192 | 12.163 |
| Jinotega | 9.783 | 11.946 | 4.597 | 1.264 | 58 | 27.648 |
| Matagalpa | 14.344 | 16.836 | 9.540 | 3.508 | 323 | 44.551 |
| Río San Juan | 665 | 986 | 2.789 | 907 | 83 | 5.430 |
| Total de fincas / productores | 118.520 | 71.751 | 42.722 | 15.102 | 1.308 | 249.403 |
| Porcentajes | 47,52% | 28,77% | 17,13% | 6,06% | 0,52% | |

NOTA: 1 manzana = 0,7 hectárea.

- 5.19 En términos del tamaño, el 76,29% de las propiedades ubicadas en los departamentos de cobertura del Programa, son de pequeños productores (fincas de entre 1 a 25 manzanas); el 17,13% son de medianos productores.

NICARAGUA
PROGRAMA DE REACTIVACION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA

MARCO LOGICO

| TEMEN NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS/RIESGOS |
|--|---|--|--|
| <p>ha contribuido al sostenible de la producción agroalimentaria y a problemas de pobreza</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Incremento en el empleo y en el ingreso rural. - Mejoramiento de la distribución del ingreso | <ul style="list-style-type: none"> - Resultados de las encuestas de hogares existentes, que se repiten a intervalos - Resultados de un análisis de encuestas especiales llevadas a cabo antes y después de la ejecución del programa, en comunidades seleccionadas | <ul style="list-style-type: none"> - Ambiente macroeconómico y políticas sectoriales favorables. - La focalización en programa en mejoramiento del capital humano y físico productivo rural es una estrategia efectiva para incrementar la productividad sectorial agroalimentaria. |
| <p>TO</p> <p>on inversiones y acciones que permitieron competitividad productiva de los medianos productores cobertura del programa.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Incremento del producto sectorial agropecuario real en el área del programa, tanto por ha. atendida como por beneficiario. - Incremento del valor agregado real total en las áreas de acción del proyecto. | <ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo y evaluación de medio término del programa - Resultados de las encuestas realizadas - Informaciones de Precios y Mercados - Entrevistas con los productores | <ul style="list-style-type: none"> - Los mecanismos del programa son adecuados al logro de los objetivos. - Las capacitaciones realizadas y las obras construidas promueven inversiones adicionales en el sector rural, mejoran la gestión de los productores y producen un efecto sinérgico en el proceso productivo. |
| <p>ENTES</p> <p>AL DESARROLLO</p> <p>mo de transferencia de y ejecución de s productivos ndo eficientemente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones canalizadas por el programa - Proyectos ejecutados y operando - Coordinación efectuada con otros programas de desarrollo rural. | <ul style="list-style-type: none"> - Informes de gestión - Supervisión del Banco - Evaluación - Auditoría - Estudios de Impacto | <ul style="list-style-type: none"> - Se mantiene un marco institucional adecuado. - Se tiene éxito en promover la descentralización y participación comunitaria - Se mejora la capacidad de gestión institucional |

| TEM NARRATIVO | INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE | MEDIOS DE VERIFICACION | SUPUESTOS/RIESGOS |
|---|---|---|---|
| <p>DOS</p> <p>ones ejecutadas que han do los resultados os</p> <p>aciones locales fortale- n procesos participativos ón y ejecución de os</p> <p>dad institucional para la cación, análisis y eje- de proyectos mejorada</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Número de personas benefi- ciadas - Número de proyectos ejecutados - Número de pequeñas fincas capitalizadas - Monto de recursos invertidos - Kilómetros de caminos rurales rehabilitados - Número de actividades capaci- tación y transferencia de tecnología desarrolladas - Hectáreas de bosque reforestadas - Sistemas de riego comunal desarrollados - Unidades para comercialización establecidas - Diversificación productiva alcanzada | <ul style="list-style-type: none"> - Análisis de los muestreos estadísticos - Supervisión del Banco - Informes de Auditoría - Evaluación del programa | <ul style="list-style-type: none"> - Los procesos de identificación, jerarquización, preparación y ejecución de inversiones funcionan adecuadamente y se mejoran constantemente - Se desarrollan mecanismos eficientes de coordinación entre el PNDR, las comunidades y gobiernos locales y las entidades e instancias de promoción y ejecución |

Original firmado
RGII-NI092P
NI-0014
Original: español

PROYECTO DE RESOLUCION

NICARAGUA. PRESTAMO ____/SF-NI A LA REPUBLICA DE NICARAGUA
(Programa de Reactivación Productiva Agroalimentaria)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Nicaragua, como Prestatario, un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento del Programa de Reactivación Productiva Agroalimentaria. Dicho préstamo será por una suma de hasta US\$40.000.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de Nicaragua, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.